

## **LA UNIVERSIDAD Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS INTELECTUALES ©**

El amparo a la creatividad intelectual, origen de la protección de los derechos intelectuales como la propiedad más legítima y originaria de quienes se dedican al *trabajo o quehacer intelectual*, base primigenia de todo posible *conocimiento*, no obstante datar en Venezuela desde 1839 hasta nuestros días, lamentablemente ha sido fue letra muerta hasta la reforma de la Ley sobre el Derecho de Autor sancionada por el Congreso en 1993, que ha permitido en estos últimos años, accionar administrativa y penalmente contra los "piratas" del derecho de autor que incluye el Software y los fonogramas.

Sin embargo, no ha sucedido lo mismo con los derechos de propiedad industrial, cuya Ley, carente de sanciones administrativas y penales capaces de desanimar a estos delincuentes de "cuello blanco", constituidos por empresas de sofisticadas técnicas, que alteran los productos de la industria y del comercio y engañan al público consumidor, no sólo en la fabricación del producto o prestación del servicio, sino también en la comercialización de aquellos y de sus signos distintivos.

No es de extrañar que durante el pasado siglo y comienzos de éste no se le diera importancia a la creatividad industrial y comercial, porque Venezuela-sustituida la etapa agro-pastoril por la petrolera - no tenía productos manufacturados para exportar, los que nos llegaban del exterior, donde

existían legislaciones un tanto severas, que se cumplían en la práctica, en materia de derechos intelectuales, o porque la competitividad así lo imponía.

Para septiembre de 1955, cuando se sanciona la Ley de Propiedad Industrial, y se operan algunos cambios en la economía nacional que prometían el desarrollo del país, ni Gobierno ni Universidad se ocuparon de atender la materia, y menos, hacer eficaz la normativa vigente entonces sobre derechos intelectuales, absolutamente desconocida para Gobiernos, Jueces, abogados, economistas, administradores de empresa, sin percatarse de la importancia de la creatividad intelectual, nueva riqueza cuya fuente es el *ingenio* o el *talento* del ser humano, esencial para el desarrollo, en base a la estructuración jurídico normativa de esos derechos, en el campo industrial, técnico y comercial, si lo que se busca es la expansión de la producción nacional hacia mercados internacionales de la Comunidad Mundial, dentro de una productividad competitiva, hoy globalizada, lo que podía hacer a nuestro país, menos dependiente de las meras explotaciones petroleras y de sus derivados, que hasta hoy ha constituido la *gran monoindustria nacional*.

Los derechos intelectuales no son objeto de *conocimiento* en ninguno de los pregrado de las Escuelas que integran las Facultades de nuestra Universidad, no obstante la antigüedad de la materia y su importancia indiscutible para el desarrollo industrial de la nación, lo que ha sido la causa del gran desconocimiento que tienen el Gobierno, los Jueces, los abogados y las empresas sobre los *derechos intelectuales*, los que cuales constituyen uno de los pilares esenciales del desarrollo económico, social y político de la nación.

Al efecto, las universidades deben percibir económicamente los beneficios que le corresponde por su propia investigación, en los más variados campos y reconocer al investigador exitoso, una participación económica de los beneficios que se producen con los resultados de su investigación en el recinto universitario..

¿Qué percibe, por ejemplo, la Universidad de Los Andes de las patentes de invención de PEDEVESA o de la explotación bajo secreto industrial sobre la ORIMULSION, cuya investigación se realizó en los laboratorios e instalaciones de esta Universidad? O en la investigación sobre obtención de nuevas variedades vegetales realizada por investigadores venezolanos en el recinto universitario de la citada Universidad de Los Andes y cuyas prácticas y conocimientos se comparten con otros institutos o Universidades extranjeras, que luego los patentan a su nombre?

Las Tesis de Grado, indispensables para que abogados, politólogos, administradores de empresa, den una demostración de la aptitud del graduando para el ejercicio y praxis de los conocimientos que adquirió, dará a la sociedad a la cual se debe, la demostración de su capacidad para el ejercicio de su profesión; estimulará al estudiante para su elaboración correcta; y, aportará a la conciencia social, los nuevos contenidos que, como supuestos de hecho, han de integrar la evolución del Derecho, independientemente de la materia que trate en su trabajo de Tesis.

Es absolutamente injustificable que las Escuelas de Derecho, de Estudios Políticos, de Economía y de Administración de Empresas de la universidad

venezolana de fines del siglo XX, no se haya ocupado de la materia, abstención de la que el país es víctima en los albores del siglo XXI, en donde la mayoría de las Universidades de Latinoamérica nos aventajan..

A partir de 1883, con el Convenio de París sobre protección a los Derechos de Propiedad Industrial y sus modificaciones posteriores, aparece sistemáticamente en algunas legislaciones de los diversos países que constituyeron la Unión, normas primarias que establecen sanciones contra aquellas prácticas mercantiles fundamentadas en la realización de operaciones o negocios mercantiles mediante fraude o engaño, obteniendo beneficios sin esfuerzo ni creatividad intelectual en el desempeño de su trabajo, lo que le garantiza, de antemano, jugosos resultados económicos dentro de la lucha competitiva en el mercado. Estas prácticas del comercio en forma artificiosa, es lo que se conoce como Competencia Desleal, hasta llegar a tipificar los más graves delitos contra la fe pública..

En el momento en que se operan en el mundo grandes cambios económicos, políticos y sociales, sobre todo, después de la post guerra, ni la Universidad ni el Gobierno venezolanos, han captado ni se ocupan de una programación dirigida, de la problemática de la propiedad industrial e intelectual, en general, como lo demuestra el hecho de que los Tratados y Acuerdos Internacionales suscritos y ratificados en materia de *derechos intelectuales*, en ningún momento han sido tomados en cuenta en los planes políticos del Gobierno ni tampoco se han definido como una política universitaria. Todo ha sido coyuntural.

Coyunturalmente, nuestros gobiernos han tocado la materia, sin política alguna definida sobre la misma, porque circunstancialmente se han visto precisados a firmar Tratados Internacionales Multilaterales sobre derechos intelectuales, y han intuido que, de no hacerlo, el país, quedaría marginado a nivel mundial, del resto de los países del Continente y del mundo, de todos los planes económicos, industriales y comerciales, en procesos de fabricación de productos finales o intermedios, dentro de un sistema económico globalizado, en donde no ha definido sus propias metas.

Dentro de esta situación, han surgido algunos enemigos de los derechos intelectuales, afortunadamente, pocos, en instituciones públicas y privadas y en algunos de los órganos del Poder Público, que alaban la "piratería" como negocio, con menosprecio del *conocimiento* y de la *creatividad*, objeto hoy de una normatividad jurídica supranacional para la mayoría de los Estados donde se establecen las normativas jurídicas de contenido que deben ser acatadas por todos los Estados suscriptores de dichos Tratados, entre los que se encuentra Venezuela.

El 14 de septiembre de 2000, se suscribió en Lima; Perú, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que deroga a la Decisión 344 que regía la materia. Esta La Decisión 486 busca ajustarse a los Tratados Internacionales suscritos por los países signatarios de la Comunidad Andina sobre Derechos Intelectuales, tales como el Convenio de París sobre Protección a la Propiedad Industrial; el Convenio de Berna sobre Obras Literarias y Artísticas, la Convención Universal sobre el Derecho de Autor; y,

otros, en virtud de que en 1994 se suscribió el Acuerdo ADPIC sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluyendo el Comercio de Mercancía Falsificada.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina, agrega tres Títulos que no estaban contenidos en la Decisión 344, Títulos XIV – XV y XVI, referentes a la Acción Reivindicatoria; Acciones por Infracción a Derechos de Propiedad Industrial; y, enuncia los principales Actos de Competencia Desleal vinculados a la propiedad industrial.

En esta forma, la Decisión 486. abre las puertas para que Venezuela, como país integrante de la Comunidad Andina, aplique las *disposiciones comunes* del su derecho venezolano, de en la acción reivindicatoria de derechos intelectuales; o, cuando se intenten las acciones enunciadas en el Título XV, sobre infracción de derechos de propiedad industrial, se le debe aplicar el sistema procedimental actualmente vigente en la legislación venezolana para los bienes materiales; de a las medidas cautelares y de a las medidas en frontera, a que se contraen los Capítulos II y III de este Título, así como las relativas a la competencia desleal, y secretos empresariales a que se contraen refieren los Capítulos I, II y III, del Título XVI de la Decisión. citada, le son aplicables las disposiciones normativas contenidas en la vigente legislación venezolana. sobre medidas cautelares de nuestro proceso, que es norma general, independientemente de la naturaleza jurídica del bien jurídico de que se trate.

Por otra parte, la suscripción por Venezuela en 1994 a la Organización Mundial del Comercio y al Acuerdo ADPIC así como a la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que son parte integrante de nuestro derecho interno, *obligan a la Asamblea Nacional Legislativa, a sancionar, a la brevedad posible, la Reforma a la Ley de Propiedad Industrial de 1955*, dentro de los parámetros establecidos en estos Tratados Internacionales. Reforma que debe contener sanciones *administrativas y penales* ejemplarizantes, como lo exige el Acuerdo ADPIC, capaces de desanimar a estos delincuentes quienes, poseedores de sofisticados medios técnicos, en los últimos años se han ocupado de invadir los mercados mundiales con *productos “piratas”*, violando los derechos de propiedad industrial de los productos acreditados en los mercados internacionales, engañando vilmente al público consumidor de los mismos, en los más variados ramos industriales.

La Reforma debe establecer el régimen de excepción a la normativa general de propiedad industrial, en lo que respecta a las Comunidades Indígenas, en defensa de sus derechos.

En el tiempo transcurrido hasta la fecha, nuestra Universidad nacional ha perdido el prestigio del que antes gozaba, al desviar hacia otros fines, su función esencial de la búsqueda del conocimiento, lo que ha permitido, en varias de ellas, la desfiguración de algunas de sus Facultades y de alguno de los Postgrados que se dictan, situación que, de mantenerse en el siglo XXI, impedirá, indudablemente, el desarrollo tecnológico, industrial y comercial de Venezuela. Situación que no debe subsistir.

En materia de Derechos Intelectuales, a la universidad le corresponde desempeñar un rol indispensable como es el de preparación del personal profesional que requiere el país en el presente y para el futuro. En tal sentido debe proyectarse hacia la colectividad y establecer vínculos bien definidos en las relaciones universidad – industria, de acuerdo con los avances de la ciencia y de la técnica, así como disponer de la infraestructura necesaria para organizar y asegurar a sus investigadores, el reclamo y puesta en práctica de sus derechos patrimoniales y morales, derivados de su ingenio o de su talento capital humano insustituible. Si la Ciencia y la Técnica marchan a pasos acelerados, no debe detenerse el proceso en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas.

La Reforma de los Estudios de Derecho, adaptando el contenido jurídico a los nuevos tiempos, es imprescindible.. Es con egresados de la Universidad en donde se deben buscar los Jueces probos para dilucidar las controversias judiciales y los funcionarios Directivos de la Administración Pública. Para ello es necesario que la universidad defina en forma responsable la política a seguir en cuanto a los estudios de Derecho en Venezuela.

La Vega de Las González, 9 de octubre de 2000.

.